

## **DESMOVILIZACIÓN DE LOS BLOQUES SINÚ, SAN JORGE Y SANIDAD DE LAS AUC**

El 18 de enero de 2005, se desmovilizaron 925 paramilitares que hacían parte de los Bloques Sinú y San Jorge, así como de una estructura denominada Bloque Sanidad, conformada por heridos en combate, que han quedado lisiados. Estas agrupaciones son consideradas entre las más históricas y núcleo central de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Su zona de operaciones se configuró como zona de retaguardia de las AUC, “santuario” de su comandancia, llegando a ser un proyecto regional que tuvo su eje en el departamento de Córdoba, respaldado por ganaderos, comerciantes, organizaciones cívicas y buena parte de la clase política. Así lo muestran las palabras de uno de los dirigentes ganaderos, que en un discurso dado en la ceremonia de desmovilización expresó: “... aquí se desmoviliza toda una sociedad”.

Esta desmovilización se hizo en medio de cuestionamientos a las condiciones de reinserción a la vida civil de los combatientes, dudas respecto a la seguridad del departamento de Córdoba, denuncias acerca de algunos abusos cometidos por paramilitares desmovilizados, así como la propuesta por parte de Ernesto Baéz de realizar un referendo nacional para que el pueblo colombiano – y no el Congreso – sea quien decidan si el destino de las autodefensas es la cárcel, la extradición o el tribunal internacional.

### ***Una estructura histórica***

De acuerdo al informe “Panorama actual del Paramillo y su entrono”, publicado en mayo de 2002 por el Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, coincidiendo con el crecimiento de las FARC y el ELN desde 1987, el fortalecimiento del Cartel de Medellín y de su brazo armado promovió la fase más impactante de la expansión de las autodefensas. En 1988, en Córdoba, Urabá y el Nordeste Antioqueño se registraron una serie de masacres que dejaron por lo menos 200 víctimas.

Según este documento: “El afán de asegurar territorios de retaguardia, de ampliar capitales y tierras, llevaron a los carteles de la droga a establecer alianzas con algunos sectores de las élites tradicionales que habían sido especialmente afectadas por la presión de las guerrillas a través del secuestro y la extorsión. En Caucasia, Montería, Valencia y Tierralta se establecieron los primeros grupos que entraron a operar de manera continua y sistemática en la región, recibiendo entrenamiento militar especial, el cual fue ofrecido en la finca Las Tangas en Valencia, Córdoba”. En 1991, se desmovilizó el Ejército Popular de Liberación (EPL), lo que produjo una etapa de calma

relativa – baja en los homicidios y en el accionar de la insurgencia -. Sin embargo, como lo describe el informe de la Vicepresidencia, la institucionalidad no se reconstruyó y las autodefensas se perfilaron como un poder hegemónico en Córdoba a través de la intimidación. De manera simultánea las FARC mantenían una intensa presión contra los desmovilizados en Urabá. En el crecimiento de las autodefensas influyó, en buena medida, el cambio de bando de antiguos comandantes del EPL.

En el año 1997 lo que se denominó las ACCU iniciaron un ofensiva con el fin de tomar control de Nudo de Paramillo, que se tradujo en asesinato, masacres y desplazamientos. Durante este período los actores evitaron los combates directos y tanto las FARC como los paramilitares, dirimieron la disputa a través de acciones dirigidas contra la población civil. Las ACCU lograron el control de todas las cabeceras municipales y desde ahí adelantaron operativos armados hacia las zonas rurales. De acuerdo al texto de la Vicepresidencia, la consolidación de las autodefensas en el eje bananero y Riosucio, las llevó a expandir su accionar a las zonas del gran Urabá, a la parte montañosa del departamento de Córdoba y al Nudo de Paramillo. Para comienzos de 1997 las ACCU empezaron una dinámica de ascenso hacia el Nudo de Paramillo desde las partes bajas de los ríos San Jorge y Sinú.

### ***Confrontación con la guerrilla: una amenaza latente<sup>1</sup>***

En diciembre de 1997 las autodefensas iniciaron una ofensiva militar contra las FARC que tuvo lugar en los municipios de Mutatá, Riosucio, Vigía del Fuerte y Frontino, aunque el objetivo principal era lo que se consideraba el cuartel general de las FARC en este momento en la zona de Urabá en Jiguamiandó. A pesar de que los paramilitares avanzaron, llegando hasta la finca la Secreta en el municipio de Mutatá – la cual se convirtió en una base de la organización -, las FARC no fueron lo suficientemente debilitadas, teniendo la capacidad de realizar una contraofensiva al año siguiente. Esta guerrilla centró su accionar en el municipio de Tierralta, donde las autodefensas tenían una base. En mayo de 1998 los paramilitares volvieron a intentar una ofensiva contra la dirigencia del Bloque de las FARC, en el municipio de Murindó, pero la acción no resultó y las autodefensas tuvieron que replegarse a su base en el municipio de Vigía del Fuerte. En noviembre la insurgencia destruyó la base de los paramilitares en La Secreta con un saldo aproximado de 40 muertos, obligándolos a replegar su dispositivo militar hacia Barijá, en Mutatá. A partir de este momento el escenario de la confrontación armada se trasladó a la Serranía de Abibe y al Nudo de Paramillo.

Las FARC lograron el control de los corredores de acceso al piedemonte cordobés en Juan José, La Rica y Puerto López, en los municipios de Puerto Libertador y

---

<sup>1</sup> Los referentes históricos fueron tomados de Observatorio de DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, “Panorama actual del Paramillo y su entrono”, mayo de 2002.

Montelíbano. Las autodefensas por su parte tomaron control sobre los municipios de Toledo, Cañasgordas, Giraldo, Ituango y Buriticá, estableciendo bases y grupos de choque que intensificaron la confrontación. A partir de 1999 las autodefensas trataron de expandirse, recuperar el terreno temporalmente perdido y consolidar su dominio en la extensa zona rural del Parque Nacional de Paramillo y las zonas perimetrales, a lo que las FARC respondieron con el ataque de las bases de las ACCU en Tierradentro, Puerto López y La Rica – los combates dejaron alrededor de 70 muertos -.

El año 2001 marca una ruptura en el desarrollo de la confrontación. Las ACCU perdieron el control de Dabeiba, Ituango, Peque, y amplias zonas de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y Toledo. Esto generó de nuevo una ofensiva paramilitar con combates sucesivos en Peque, Briceño, Dabeiba, Tarazá, Tierralta y Puerto Libertador, convirtiendo al Nudo de Paramillo. Para finales de este año, las FARC sostuvieron el control casi de manera exclusiva en Peque, Ituango y Dabeiba, mientras que en Tarazá, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta, Briceño, Urama y Buriticá se conservaron como municipios en disputa.

En los últimos años, la confrontación entre las agrupaciones al margen de la ley se ha mantenido. En Tierralta se registraron enfrentamientos en los corregimientos de Crudito Saisa y La Palestina; en Valencia en el corregimiento Los Guadales; en Puerto Libertador, en el corregimiento de Tierradentro. Las zonas de frontera entre los dominios han variado de acuerdo al ritmo de la confrontación, siendo el Nudo de Paramillo un territorio que aún se encuentra en disputa, teniendo como estructuras más activas los frentes 5, 18 y 38 de las FARC, así como el Bloque Mineros de las AUC, estructura que aun no ha entrado en el proceso de desmovilización.

A raíz del establecimiento de la zona de ubicación para el proceso de negociación con los paramilitares, las Fuerzas Militares han incrementado su presencia y actividad en la zona. Como se muestra el Boletín Coyuntura de Seguridad No. 7 de la Fundación Seguridad y Democracia, en 2001 y 2002 no se registraron combates entre las FARC y las Fuerzas Militares, situación explicable porque en esos años hacían presencia los paramilitares y el Ejército no realizaba operaciones en el área. Los combates entre irregulares y el Estado se empezaron a manifestar en 2003, y se incrementaron notablemente en 2004, sobre todo en la segunda mitad, cuando ocurrieron 34, casi el triple de los 12 que habían tenido lugar el año pasado. Hay que anotar que hubo combates durante 26 semanas del año y que se presentaron en forma consecutiva durante siete. Se puso en práctica la operación militar “Motilón” dirigida contra los frentes 18 y 34 de las FARC especialmente.<sup>2</sup> Esta ofensiva viene siendo adelantada por varias brigadas, entre ella la Brigada Móvil No. 11 con el apoyo de la Fuerza Aérea y varios batallones contra guerrilla.

---

<sup>2</sup> La Agencia de Prensa del Ejército resumió buena parte de esta operación militar. Ver comunicados del 14 de octubre, 22 de noviembre. 8 y 9 de diciembre de 2004.

De todas maneras es importante mencionar que las Fuerzas Militares mantienen un cordón de seguridad que pretende limitar el paso de las FARC al valle del Sinú en donde está Santa Fe de Ralito. Sin embargo la presencia de la guerrilla en la zona es aún notable, teniendo una gran movilidad y capacidad de desarrollar ofensivas. El municipio de Dabeiba, punto de frontera de la guerra debido a su geografía, en especial el Cañon de la Llorona, sigue siendo una zona crítica, prueba de esto los hechos acaecidos en la primera semana de febrero de 2005, en una emboscada en la cual murieron 19 soldados – evento que provocó el relevo del comandante de XVII Brigada, general Héctor Jaime Fandiño -.

### ***La única amenaza no es la guerrilla***

Además de la amenaza de que la insurgencia comience a copar territorios en el departamento de Córdoba, también hay un temor por las condiciones de seguridad que puede enfrentar este departamento. No es un secreto que los grupos paramilitares regulaban en cierta medida la criminalidad, ofreciendo ciertas garantías a los habitantes de la región, en un intercambio de protección por recursos y apoyo. Con las autodefensas desmovilizadas es posible que se generen algunos vacíos de seguridad que puede aprovechar la delincuencia común.

De acuerdo al diario *Meridiano de Córdoba*, el sector Bancario fue duramente golpeado en 2004 con el robo al Banco Colmena por parte de una banda el 15 de diciembre, que logró sustraer de la entidad 120 millones de pesos – unos años atrás era impensable que un hecho como este sucediera en Córdoba -. Además, en repetidas oportunidades se presentaron atracos a clientes que retiraran grandes sumas de dinero y eran seguidos por los asaltantes que los despojaban del dinero antes de llegar a su residencia.<sup>3</sup> El 5 de febrero de 2005, el diario *El Universal* de Montería publicó un artículo con el título “Ola de atracos tiene en vilo a la comunidad Monteriana”. De acuerdo a este periódico los recientes casos que se han presentado en esta capital, han provocado un estado de alerta entre sus habitantes. Aunque la Policía Nacional realiza constantes patrullajes, especialmente en el sector céntrico de Montería, los robos a establecimientos han aumentado en lo que va del año. Los casos más recientes se registraron en el almacén Super Óptimo el 30 de enero de 2005 y en la droguería Nueva York, el 2 de febrero, cuando sujetos desconocidos se llevaron dinero y medicamentos.

Hay que considerar que la desmovilización de las autodefensas no sólo provoca un vacío de seguridad, sino que además introduce a las comunidades un grupo de población desocupada – los desmovilizados – que potencialmente pueden comenzar a ser parte de organizaciones criminales. Ya varios estudios, especialmente el de

---

<sup>3</sup> Diario Meridiano de Córdoba, “Bancos sin seguridad”, 10 de febrero de 2005.

Barbara Walter, han mostrado que las personas que participaron en la confrontación armada – y esto cuenta para los dos bandos – se presenta una nueva condición de supervivencia la cual no siempre es garantizada por los acuerdos.<sup>4</sup> En este escenario las prácticas de uso de la fuerza reciben un impulso derivado de la incapacidad de adaptarse a las nuevas condiciones: algunos excombatientes adoptan un modo de vida delincencial que les permite no sólo garantizar la existencia de recursos mínimos de subsistencia sino también un lucro generador de excedentes y de una economía ilegal. En este marco la conformación de bandas y pandillas es común, así como la persistencia de la posesión de las armas como garantía de seguridad y de poder.

Una situación que ilustra esta situación es la utilización de los carnés de desmovilización para no pagar cuentas o amedrentar a vecinos, como lo denunció el coronel Álvaro Acosta, el oficial designado por la Policía Nacional para el proceso de entrega de identificaciones. De acuerdo al coronel Acosta se han recibido numerosas denuncias que se han recibido sobre desafueros de algunos desmovilizados en bares y cantinas e incluso en sus barrios. Hay que considerar que al departamento de Córdoba no sólo han llegado los excombatientes de la región del Sinú y San Jorge; también lo han hecho personas que estaban en otras zonas como el Catatumbo y el Urabá, a los cuales al parecer se les han demorado con los pagos. Precisamente el anuncio de concentración de las autodefensas que operaban en Córdoba coincidió con la protesta en Montería de un grupo de desmovilizados del Bloque Catatumbo, que exigen el pago cumplido de la segunda ayuda humanitaria, acordada con el Gobierno en \$358.000 – el director del Centro de Referencia de Montería, Diego Lacotoure, aseguró que el pago si se está haciendo pero en pequeños grupos -.

Además habría que considerar también la misma seguridad de los desmovilizados. Varios de ellos decidieron asentarse en Córdoba pensando en que tendrían más garantías, sin embargo se han encontrado con que en este territorio también se pueden ver amenazados. Prueba de esto, el homicidio de Andrés Antonio Del Castillo y Gerson Luis Murillo, integrantes de las autodefensas de Cesar y Meta, respectivamente, quienes fueron asesinados en el municipio de Tierralta. Para los desmovilizados la falta de oportunidades laborales combinada con los riesgos en la seguridad puede derivar en la decisión de hacer uso de las armas para procurarse no sólo ingresos sino también protección.

Experiencias como las acontecidas en algunos países de Centroamérica ya han mostrado que los procesos de negociación y desmovilización pueden conllevar a

---

<sup>4</sup> Uno de los principales interrogantes en cualquier negociación de guerras civiles tiene que ver con la incertidumbre de los insurgentes en la situación posbélica. Es decir, si su vida, y las garantías para la misma van a ser cumplidas por el Estado. Por lo tanto, las partes pueden creer que su interés está en terminar la guerra, pero la incertidumbre frente a las garantías de su seguridad les lleva a continuar su lucha militar, véase Walter, Barbara, *Committing to Peace: The Successful Settlement of Civil Wars*, Princeton: Princeton University Press. 2001; "The critical Barrier to Civil War Settlement" en *International Organization* 51, 3. Summer 1997.

situaciones más críticas de seguridad. Como lo muestra Dinorah Azpuru luego del proceso de paz en Guatemala, los niveles de violencia no experimentaron un descenso significativo; por el contrario la violencia no política persistió, con un alarmante incremento del secuestro, el robo de vehículos y residencias, los asaltos en los buses y casos dramáticos de linchamiento público de los criminales<sup>5</sup>.

**Bogotá, febrero de 2005.**

---

<sup>5</sup> Azpuru, Dinorah, "Peace and Democratization in Guatemala: Two Parallel Processes". En *Comparative Peace Processes in Latin América* editado por Cynthia Arnson, Washington and Stanford, Woodrow Wilson Center, 1999, p. 120.